

Señor
JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE CONVENCION
E. S. D.

Ref: Acción de Tutela por violación de los derechos fundamentales de igualdad y oportunidad en concurso de méritos, que hacen parte de los principios establecidos en el Decreto 1578 del 28 de septiembre de 2017, por violación del principio de conexidad suficiente que es uno de los requisitos materiales de validez constitucional, establecido en la parte considerativa del Decreto 882 e 2017; como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable

ACCIONANTE: MAIRA ALEJANDRA GARCÍA MARTÍNEZ

CONTRA: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

MAIRA ALEJANDRA GARCÍA MARTÍNEZ, mayor de edad, con domicilio en el Municipio de CONVENCION, identificada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi propio nombre, instauró ACCIÓN DE TUTELA, contra los demandados arriba señalados, representados legalmente por los doctores LUZ AMPARO CARDOSO CAÑIZARES en su condición de Comisionada y la Doctora MARÍA VICTORIA ANGULO en su condición de Ministra de Educación Nacional, o quien haga sus veces o tenga la facultad legal de ejercer esta representación, por violación al derecho fundamental AL DEBIDO PROCESO Y AL DERECHO DE PETICIÓN.

ANTECEDENTES

PRIMERO: Como consta en acto administrativo adjunto, laboro como docente provisional del CER LA TRINIDAD del Municipio de Convención.

SEGUNDO: Soy oriundo del Municipio de Convención y resido en esta región desde el año: 1988,

TERCERO: En el marco de los Decretos Ley 882 y 893 de 2017 y a través del Decreto 1578 de 2017 se reglamentó el concurso especial de méritos docentes para la provisión de educadores en las zonas afectadas por el conflicto don Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), definidas por el Gobierno Nacional, el cual está haciendo adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil conforme a la Convocatoria No. 601 a 623 de 2018 Directivos Docentes y Docentes en Zonas Afectadas por el Conflicto Armado.

Conforme se refiere en la parte considerativa del Decreto 882 del 26 de mayo de 2017 el contenido de este decreto ley tiene una naturaleza instrumental, en el sentido que tiene por objeto facilitar o asegurar la implementación y desarrollo normativo del punto uno del Acuerdo Final- Reforma Rural Integral-, particularmente del punto 1.3.2.2.

Dentro del requisito de CONEXIDAD SUFICIENTE, que hace parte de los requisitos materiales de validez constitucional se hace referencia que conforme al artículo 68 de la Constitución, a cuyo tenor " la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica ", se garantiza con la exigencia en las pruebas y con la obtención de los mejores resultados en el concurso, y no con las condiciones de partida, como lo son títulos académicos para participar en el mismo.

CUARTO: Como lo establece la SECCIÓN 3 CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS Artículo 2.4.1.6.3.1. Del Decreto 1578 del 28 de septiembre de 2017, *Principios*. El concurso de méritos de carácter especial de que trata el presente capítulo estará sujeto a los principios de igualdad, oportunidad, publicidad, objetividad, imparcialidad, confiabilidad, transparencia, eficacia, eficiencia y economía.

SE VULNERA EL DERECHO DE IGUALDAD en la normatividad que regula el proceso de participación de los Docentes. Léase Decreto 1578 del 28 de septiembre de 2018 en los requisitos para el concurso Docente y comparece con los requisitos establecidos para el concurso del personal Administrativo según lo establece el Decreto 1038 del 21 de junio de 2018.

NÓTESE: que el Decreto 1038 establece unos requisitos especiales, Artículo 2.2.36.2.4. El aspirante al proceso de selección en los municipios priorizados, además de los requisitos señalados en los artículos anteriores, debe acreditar una de las siguientes condiciones:

1. Haber nacido, en alguno de los 170 municipios priorizados que se encuentran relacionados en el Decreto 893 de 2017
2. Acreditar, a través de certificado de vecindad, de estudio o laboral otorgado por autoridad competente, haber tenido la calidad de residente, estudiante o trabajador al menos dos (2) años continuos o discontinuos en cualquiera de los 170 municipios priorizados por el Gobierno nacional, los cuales se encuentran relacionados en el Decreto 893 de 2017 Continuación del Decreto "Por el cual se adiciona un Capítulo en el Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, y se dictan otras disposiciones"
3. Estar inscrito en el Registro Único de Población Desplazada
4. Estar inscrito en el Registro Único de Víctimas
5. Estar inscrito en el Sistema de Información de la Reintegración.

Igualmente de manera ostensible se vulnera el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, por cuanto que en el momento de hacer la convocatoria no se tuvieron en cuenta los Decretos aludidos en la presente acción de tutela los cuales están enmarcado dentro del proceso de paz, que en su fundamento es el de estabilizar la zona de conflicto propiciando que los mismos pobladores tengan acceso a ocupar estas plazas. Por el contrario se le dio viabilidad de manera abierta a toda la población en general, lo cual contradice las normas expedidas fruto del dialogo y la concertación dentro del proceso de paz.

Obsérvese entonces que dentro de este análisis los decretos 1578 del 2017 y 1038 del 2018 a pesar de que fueron expedidos con base y fundamento en el proceso de paz y que buscan la misma finalidad hacen diferencia entre los mismos trabajadores administrativos y Docentes lo cual le impide la igualdad en el derecho especialmente a los Docentes quienes no encuentran ninguna favorabilidad luego de haber laborado durante 15 o 20 años y hoy ven amenazada su condición de vida de manera irremediable luego de haber conformado su familia, forma de vida en el entorno de esta región caracterizada por el conflicto. Esta consideración permite que personas sin ningún arraigo en la zona ocupen los cargos ofertados sin que otorguen las garantías de permanecer en la zona por sus características enunciadas, conllevando igualmente a dejar sin trabajo un número considerable de Docentes que han sacrificado muchos años al servicio de estas comunidades.

QUINTO: Como es del conocimiento público, este municipio se encuentra localizado en la región del Catatumbo, la cual se caracteriza por dificultades en la comunicación y de barreras para el acceso de los medios de comunicación.

SEXTO: Lo anterior dificulta el acceso de los aspirantes a la preparación y estudio para el concurso de méritos, en especial para la prueba, de conocimientos específicos y pedagógicos, la cual tiene carácter eliminatorio, conforme lo establece el artículo 1 del Decreto 882.

SÉPTIMO: La fecha establecida para el 04 de agosto para la aplicación de las pruebas, es inoportuna, en atención a que por los motivos ya relacionados, el personal aspirante no ha estado en condiciones de efectuar la debida preparación, por las barreras técnicas y la persistencia de las condiciones de orden público, (víctimas de la violencia y desplazamiento) que no brindan las condiciones propicias para la preparación del Docente. Entre ellos mencionamos, los continuos enfrentamientos armados, la

interrupción del proceso de la prestación del servicio educativo a causa del desplazamiento, amenazas, amedrentamientos y efectos psicológicos que causan la inestabilidad emocional al personal Docente y al conjunto de la Comunidad Educativa. Un caso concreto que ha tenido una repercusión Nacional e Internacional es la sufrida por el Docente DIOMAR JESÚSPÉREZ MUÑOZ, quien fue víctima de una mina quiebra patas en las propias instalaciones de su Institución Educativa en el Municipio de Hacarí y las continuas amenazas tratadas en el comité de amenazados del Norte de Santander.

OCTAVO: Se ha solicitado la postergación para la realización de las pruebas para el mes de noviembre lo cual no ha tenido eco en la C.N.S.C.

NOVENO: *Conforme lo establece la Sentencia T-180/15 En lo que se refiere a las decisiones que se adoptan dentro de un concurso de méritos, esta Corporación ha sostenido que si bien los afectados pueden acudir a las acciones señaladas en el Estatuto Procesal Administrativo para controvertirlas, en algunos casos las vías ordinarias no resultan idóneas y eficaces para restaurar los derechos fundamentales conculcados, ya que no suponen un remedio pronto e integral para los aspirantes y la mayoría de veces debido a la congestión del aparato jurisdiccional, el agotamiento de las mismas implica la prolongación de la vulneración en el tiempo. La acción de tutela es un mecanismo excepcional de defensa de los derechos fundamentales de las personas participan en un proceso de selección de personal público y son víctimas de un presunto desconocimiento de cualquiera de sus derechos fundamentales.*

DECIMO: El perjuicio irremediable en el caso de marras, hace referencia que debido a las circunstancias técnicas, socioeconómicas y culturales en que se encuentran las zonas especiales donde se va a desarrollar el concurso, se avisa un fracaso en los resultados de las mismas, debida a que por la premura y las circunstancias ya anotadas; los docentes actualmente vinculados por provisionalidad y los demás aspirantes, están en clara desventaja, lo cual mina los principios establecidos en el Decreto 1578 del 28 de septiembre de 2017 a saber: igualdad, oportunidad, publicidad, objetividad, imparcialidad, confiabilidad, transparencia, eficacia, eficiencia y economía

Por lo antes expuesto y teniendo en cuenta de que dentro de la Zonas de conflicto la más afectada es la Zona del CATATUMBO, el estado Colombiano debe atender con prioridad las siguientes:

PETICIONES

PRIMERO: Que se me TUTELEN los DERECHOS FUNDAMENTALES DE IGUALDAD, OPORTUNIDAD EN LOS CONCURSOS DE MERITO, COMO MECANISMO TRANSITORIO PARA EVITAR UN PERJUICIO IRREMEDIABLE.

SEGUNDA: Se ordene a la C.N.S.C en consuno con el Ministerio de Educación Nacional, prorrogar la fecha para la realización de las pruebas escritas, hasta tanto se dé cumplimiento al espíritu del proceso de paz consagrado en el Decreto 1038 de junio de 2018.

TERCERO: Que se tengan en cuenta los antecedentes jurisprudenciales.

ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES.

La procedencia excepcional de la acción de tutela en materia de concursos de méritos. Reiteración de jurisprudencia (Sentencia T-682/16)

3.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta, la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial residual y subsidiario, que permite la protección inmediata de los derechos fundamentales de una persona, vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o incluso de los particulares, en los términos prescritos por la ley. Procede cuando la persona no dispone de otro medio de defensa judicial o cuando, existiendo otro medio alternativo de protección, éste no resulta idóneo para su amparo efectivo. Asimismo, procede como mecanismo transitorio, en

aquellas circunstancias en las que, a pesar de existir un medio adecuado de protección, se requiere evitar un perjuicio irremediable, por lo que se exige una perentoria acción constitucional.^[7]

3.2. Pues bien, la idoneidad del medio de defensa alternativo exige una evaluación en concreto de los mecanismos de defensa existentes, razón por la cual debe estudiarse cada caso en particular, a efectos de determinar la eficacia del medio de defensa, si este tiene la aptitud necesaria para brindar una solución eficaz y expedita al quebrantamiento o amenaza del derecho fundamental que se alega vulnerado. Vistas así las cosas, si el mecanismo es eficaz, la tutela resulta ser improcedente, a menos que, como quedó expresado, se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable que imponga la protección constitucional transitoria.

3.3. En relación con los concursos de méritos para acceder a cargos de carrera, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que, en principio, la acción de tutela debe declararse improcedente. No obstante lo anterior, el precedente de la Corte ha señalado que los medios de control de la jurisdicción contencioso administrativa, bien sea a través de la acción electoral, de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho o de la acción de reparación directa, no son los mecanismos idóneos y eficaces, en razón del prolongado término de duración que este tipo de procesos pudiese tener.^[8]

3.4. Específicamente, en lo que tiene que ver con la procedencia de la acción de tutela para controvertir actos administrativos que reglamentan o ejecutan un proceso de concurso de méritos, se ha precisado, por parte del precedente de la Corporación, que existen dos casos en los cuales la acción de tutela se convierte en el mecanismo idóneo: (i) *"aquellos casos en los que la persona afectada no tiene un mecanismo distinto de la acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos porque no está legitimada para impugnar los actos administrativos que los vulneran o porque la cuestión debatida es eminentemente constitucional"*. (ii) *"cuando, por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la persona que interpone la acción. Estos casos son más complejos que los que aparecen cobijados por la excepción anterior, pues en ellos existen cuestiones legales o reglamentarias que, en principio, deben ser definidas por el juez contencioso administrativo pero que, dadas las circunstancias concretas y la inminente consumación de un daño iusfundamental deben ser, al menos transitoriamente, resueltas por el juez constitucional."*^[9]

3.5. La procedencia de la acción de tutela para anular los actos de las autoridades públicas cuando desconocen los mecanismos de selección establecidos en los concursos públicos, tiene una inescindible relación con la necesidad de proteger los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y debido proceso, los cuales en la mayoría de las ocasiones, no pueden esperar el resultado de un proceso ordinario o contencioso administrativo.

3.6. Ahora bien, resulta importante diferenciar la procedencia de la tutela en los casos en los cuales se controvierte un acto administrativo y los asuntos como el que nos ocupa, en el que la acción de amparo se contrae a exigir de las autoridades judiciales el cumplimiento de un proceso de selección en el término establecido por la ley y, de conformidad con lo señalado en la Convocatoria y el Acuerdo proferido por el Consejo Superior de la Judicatura que reglamenta el mismo.

PRUEBAS

DOCUMENTALES: Allego las siguientes.

DERECHO

Constitución Política: Arts. 2, 11, 23, 25, 48, 53 y 86. Decreto 2591 de 1991.
Decreto 882 de mayo de 2017.

Decreto 893 de septiembre de 2017.
Decreto 894 de 2017.
Decreto 1578 de 28 de septiembre de 2017.
Decreto 1038 de 21 de junio de 2018, y demás normas concordantes.
ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES

MANIFESTACION BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no he iniciado acciones judiciales diferentes a la presente acción, para proteger los derechos fundamentales quebrantados.

ANEXOS

Documentos señalados en el acápite de pruebas.

NOTIFICACIONES

Se reciben en las siguientes direcciones:

LAS DEMANDADAS EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES:

1. COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL: Carrera 16 NO. 96-64. Piso 7. Bogotá. Fax 3259713.
2. Ministerio de Educación Nacional: Calle 43 No. 57 - 14. Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá.

El suscrito ACCIONANTE

Atentamente.

Nombre: Maira Alejandra García Martínez
C.C. 1.090984514 de Convención

Firma: Maira Alejandra García M.

Notificaciones las recibo en la siguiente

Dirección Carrera 1015-21 Barrio La fortuna Convención

Correo: maiajgarmar@gmail.com

Teléfono: 3115836242

ANEXOS:

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
ATENCION AL CIUDADANO

FECHA, 10 de Enero de 2018

Se notifica personalmente a: MAIRA ALEJANDRA GARCIA MARTINEZ quien se identificó con Cedula de Ciudadanía 1090984514 expedida en Convención, del contenido del decreto 000014 de fecha 02 de Enero de 2018

El notificado, Maira Alejandra Garcia M

Cedula de Ciudadanía N° 1090984514 de Convención

El notificador ACBA DEARCE